

Creciente oposición social frente a la proliferación de macroplantas de biogás

- La oposición ciudadana a las macroplantas de biogás crece por riesgos ambientales y falta de transparencia. Vecinos y ayuntamientos exigen soluciones.



Manifestación contra el biogás

<https://www.renovablesverdes.com/creciente-oposicion-social-frente-a-la-proliferacion-de-macroplantas-de-bio...>

Isaac

Sábado, 27 junio 2026

Editor

En los últimos meses, el panorama rural en varias regiones de España está experimentando una agitación sin precedentes debido a la proyección de numerosas instalaciones industriales de biometano. Lo que sobre el papel se vende como una solución de economía circular, está encontrando un **muro de resistencia ciudadana** en localidades que temen ver alterado su modo de vida tradicional. Desde la Ribera del Duero hasta el sur de Córdoba, el malestar crece ante infraestructuras que, según los vecinos, están sobredimensionadas para las necesidades reales de los territorios donde se pretenden ubicar.

El descontento no es algo pasajero ni de cuatro gatos, sino que se ha materializado en movilizaciones multitudinarias y recogidas masivas de firmas que buscan frenar lo que consideran una amenaza directa. Las plataformas ciudadanas han logrado sacar el debate de los despachos municipales para llevarlo a las calles, exigiendo que se escuche la voz de quienes realmente van a convivir con estas plantas. El temor a que sus pueblos se conviertan en **receptores de residuos de otras zonas** ha encendido todas las alarmas, generando un frente común que une a agricultores, ganaderos y residentes en una lucha que parece ir para largo.

Riesgos ambientales y preocupación por la salud pública

Uno de los puntos que más escama a la población es el posible impacto sobre los recursos hídricos y la calidad del aire. Los proyectos planteados manejan volúmenes de residuos que superan en muchos casos las decenas de miles de toneladas anuales, lo que conlleva una **gestión compleja de lixiviados** y el riesgo de filtraciones a los acuíferos locales. Esta preocupación no es baladí, ya que el agua es el motor de la vida en estas zonas y cualquier mínima sospecha de contaminación pone en jaque el futuro de comunidades enteras que dependen de sus pozos y fuentes.

Por otro lado, la cercanía de estas macroplantas a los cascos urbanos, en algunos casos a poco más de dos kilómetros, genera una inquietud lógica respecto a los olores y la proliferación de insectos. Los vecinos no quieren que sus municipios pierdan atractivo ni que la **calidad de vida se vea mermada** por una actividad industrial constante. Además, el aumento del tráfico pesado necesario para transportar tales cantidades de residuos orgánicos por carreteras secundarias no mola nada, ya que supone un incremento de la inseguridad vial y del ruido en entornos habitualmente tranquilos.

La falta de información clara ha sido la gota que ha colmado el vaso en muchos procesos administrativos. En varios municipios se critica que la ciudadanía solo ha tenido acceso a los detalles técnicos cuando los plazos de alegaciones estaban a punto de expirar, lo que se percibe como una **estrategia de hechos consumados** por parte de las empresas promotoras. Esta opacidad solo ha servido para alimentar la desconfianza y para que los colectivos afectados se organicen con mayor firmeza en defensa de su entorno natural.

El choque entre el modelo industrial y el desarrollo rural

El conflicto no solo es ambiental, sino que toca de lleno el corazón económico de comarcas que han apostado históricamente por la excelencia. En zonas con una fuerte identidad ligada a la viticultura de calidad, se ve con pavor que la marca del territorio pueda verse empañada por la presencia de grandes plantas de tratamiento de residuos. Los productores locales defienden un **modelo de desarrollo sostenible** basado en el paisaje y el turismo de bajo impacto, algo que consideran totalmente incompatible con instalaciones que importan materiales externos para generar energía a gran escala.

Las organizaciones agropecuarias también han alzado la voz para pedir coherencia. Si bien no se oponen frontalmente a la gestión de los propios purines o restos agrícolas, rechazan de pleno el concepto de macroplanta centralizada que no responde a un equilibrio productivo local. Lo que se demanda es un **aprovechamiento real de los recursos** de la zona, de forma que el beneficio se quede en el territorio y no suponga un sacrificio ambiental para favorecer intereses de grandes corporaciones energéticas que poco tienen que ver con el día a día del campo.

La sensación de que se están creando zonas de sacrificio para gestionar lo que nadie quiere en las grandes ciudades está muy presente en el discurso de los colectivos vecinales. Se reclama una planificación territorial que no deje al libre albedrío de las empresas la ubicación de estas plantas, sino que se base en **criterios técnicos y sociales rigurosos**. No se trata de estar en contra del progreso, sino de asegurar que dicho progreso no pase por encima de los derechos básicos y la salud de quienes mantienen vivos nuestros pueblos.

La necesidad de una planificación administrativa global

Ante la avalancha de proyectos, la petición de moratorias se ha convertido en un clamor común dirigido a las juntas autonómicas. Se solicita que se paralice la concesión de nuevas licencias hasta que se realicen **estudios de impacto acumulativo** que evalúen qué pasa cuando se instalan varias plantas en una misma comarca. Hasta ahora, las evaluaciones se suelen hacer de forma individual, ignorando el efecto combinado que puede tener la suma de todas ellas sobre el medio ambiente y la infraestructura de comunicaciones de una zona concreta.

La transparencia informativa se sitúa como el pilar fundamental para rebajar la tensión social existente. Los ayuntamientos y las plataformas exigen procesos de participación ciudadana reales donde se expliquen todos los pormenores, incluyendo la procedencia de los residuos y el destino final de los digestatos. Sin una **comunicación fluida y honesta**, es prácticamente imposible que estos proyectos consigan la aceptación social necesaria para su implantación, ya que la gente no está dispuesta a que le den gato por liebre en temas que afectan a su salud y al futuro de sus hijos.

La presión popular ha conseguido que algunos consistorios den un paso atrás o se posicionen formalmente en contra de estas instalaciones en sus plenos municipales. La batalla judicial también empieza a asomar en el horizonte, con asociaciones dispuestas a llegar a los tribunales si consideran que se han vulnerado sus derechos o que los procedimientos administrativos han sido deficientes. La unidad vecinal se ha convertido en la herramienta más potente para **velar por el equilibrio territorial** y asegurar que la transición energética sea justa y no a costa de los de siempre.

La movilización ciudadana y la respuesta de las instituciones locales dejan claro que la implantación del biogás en España no puede hacerse de espaldas al territorio. El rechazo a las macroplantas no es un ataque a las energías renovables, sino una defensa a ultranza de un **entorno saludable y un futuro digno** para el mundo rural. Solo mediante un diálogo real, una planificación estratégica que evite la saturación de proyectos y un respeto escrupuloso por las actividades económicas preexistentes, se podrá encontrar un camino que concilie la necesidad de nuevas fuentes de energía con la protección del patrimonio natural y social de nuestros municipios.